



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, trece (13) de agosto de dos mil veinte (2020)

Auto Interlocutorio No. 157

MAGISTRADA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTALORA

MEDIO CONTROL:	DE	EJECUTIVO
EXPEDIENTE:		76001-23-33-000-2019-00979-00
EJECUTANTE:		LUIS FERNANDO RONCANCIO CARDONA Y OTROS
EJECUTADO:		NACIÓN – RAMA JUDICIAL – FISCALIA GENERAL DE LA NACION
ASUNTO		AUTO LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO

I. OBJETO DE LA DECISION

Determinar si existen los presupuestos necesarios y suficientes para librar mandamiento de pago en contra la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en virtud de la demanda ejecutiva presentada por los señores LUIS FERNANDO RONCANCIO CARDONA, DORA DE JESUS CARDONA y MARIA ISABEL RONCANCIO CARDONA, quienes actúan a través de apoderado judicial debidamente constituido.

II. ANTECEDENTES

La obligación que se pretende recaudar se sustenta en la sentencia del 30 de abril de 2009 proferida por esta Corporación, modificada parcialmente por la sentencia del 07 de octubre de 2015¹, emitida por la Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado, que decidió:

“PRIMERO: MODIFÍCASE el numeral 3 de la sentencia del 30 de abril de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el cual quedará así:

“3: Como consecuencia de la declaración anterior, CONDÉNASE a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar a los demandantes los perjuicios materiales y morales que se indican a continuación:

“A favor de Luis Fernando Roncancio Cardona:

“a- La cantidad de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, por concepto de perjuicio moral.

¹ Ver folios 355 a 382 cuaderno No. 2 – proceso ordinario

“b. La suma de \$11.805.867,93, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante.

“A favor de la señora Dora de Jesús Cardona:

“a. La cantidad de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, por concepto de perjuicios morales.

“b. La suma de \$2.906.575.00, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente.

“A favor de la señora María Isabel Roncancio Cardona, la cantidad de 50 salarios mínimos legales mensuales a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, por concepto de perjuicios morales.

SEGUNDO: CONFÍRMASE en lo demás la sentencia de primera instancia.

TERCERO: Sin condena en costas.

La decisión anterior quedó debidamente ejecutoriada el 22 de octubre de 2015, según constancia visible a folio 382 del cuaderno No. 2 proceso ordinario.

III. CONSIDERACIONES

3.1 COMPETENCIA

Si bien es cierto el numeral 7 del artículo 152 del CPACA atribuye la competencia a la Corporación para conocer de procesos ejecutivos, en principio en razón de la cuantía, la Sala acoge el criterio de conexidad expuesto en providencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado con ponencia del consejero William Hernández Gómez, dentro el expediente A.I. 0-001-16 y asume el presente asunto en PRIMERA INSTANCIA al haber proferido la sentencia objeto de ejecución.

3.2 DEL PROCESO EJECUTIVO Y EL TÍTULO EJECUTIVO EN LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA:

La Ley 1437 de 2011 no regula de manera integral el trámite del proceso ejecutivo en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por lo tanto, es necesario remitirse al Código General del Proceso y aplicar de manera armónica ambos estatutos procesales, tal y como se explica a continuación.

El artículo 297 CPACA² establece que son títulos ejecutivos: **(i)** las sentencias proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo que condenen a

² Artículo 297. Título Ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:

1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.



una entidad pública al pago de sumas de dinero; **(ii)** las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que una entidad pública quede obligada al pago de sumas de dinero; **(iii)** el contrato estatal, el acta de liquidación, los documentos en que consten las garantías del contrato - que deberán estar acompañados del acto administrativo que declare el incumplimiento contractual - o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, y **(iv)** las copias auténticas de los actos administrativos que reconozcan un derecho o admitan la existencia de una obligación.

A su vez, el artículo 422 del CGP³ define que son títulos ejecutivos las obligaciones claras, expresas y exigibles que consten en: **(i)** un documento que provenga del deudor o de su causante; **(ii)** una sentencia condenatoria o cualquier otra providencia judicial; **(iii)** las providencias que en los procesos policivos aprueben la liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de justicia, y **(iv)** los demás documentos que expresamente disponga la ley.

Respecto al mandamiento ejecutivo, el artículo 430 del CGP establece que: *“presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal”*.

El presupuesto para el ejercicio de la acción ejecutiva **es la existencia formal y material de un documento o conjunto de documentos que contengan los requisitos de título ejecutivo**, de los cuales surja la certeza legal y judicial del derecho del acreedor y la obligación correlativa del deudor.

En el presente asunto, la parte ejecutante presenta solicitud de proceso ejecutivo autónomo, aportando copia de la solicitud de pago de la sentencia, pero no aportó copia de los actos que pretende ejecutar, sin embargo, el Despacho de manera oficiosa solicitó el desarchivo del proceso ordinario

2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible.

3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones.

4. Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. La autoridad que expida el acto administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia auténtica corresponde al primer ejemplar.

³ Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184.



Radicación : 76001-23-33-000-2019-00979-00
Medio de control : EJECUTIVO
Ejecutante : LUIS FERNANDO RONCANCIO CARDONA Y OTROS
Ejecutado : NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

4

donde reposa el original de la providencia a ejecutar, así como la constancia de ejecutoria.

3.3 CASO CONCRETO:

En el presente asunto, la ejecución que se pretende encuentra su causa jurídica en la Sentencia del 30 de abril de 2009⁴, proferida por esta Corporación, que declaró administrativamente responsable a la Nación – Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor Luís Fernando Roncancio Cardona, fallo que fue modificado parcialmente por el Consejo de Estado mediante sentencia del 07 de octubre de 2015⁵.

A folios 7 a 10 del cuaderno ejecutivo se observa que la solicitud de pago fue remitida a la entidad ejecutada vía correo certificado el 19 de mayo de 2016 con fecha para entrega el 20 de mayo de 2016.

El título es simple⁶ pues se encuentra constituido por las sentencias condenatorias ejecutoriadas, que se dice, no fueron acatadas por parte de la Fiscalía General de la Nación pese a que el ejecutante radicó solicitud de cobro, a fin de iniciar los trámites administrativos tendientes a efectuar la liquidación y pago de las sumas de dinero derivadas de los fallos condenatorios.

Pese a la gestión de la parte ejecutante para procurar la liquidación y pago de la condena, a la fecha la entidad ha guardado completo silencio, habiendo transcurrido más de 36 meses⁷ y como deviene evidente que nos encontramos ante un título ejecutivo pues en la sentencia consta una obligación clara, expresa y exigible, ya que condenó a favor de los ejecutantes y a cargo de la ejecutada una suma determinable de dinero, se acreditan los elementos necesarios y suficientes para librar mandamiento de pago.

Así, se reúnen los requisitos de los artículos 82, 83 y siguientes del CGP y existe un título con los requisitos legales conforme al artículo 422 Ibídem, lo que obliga al despacho a dar cumplimiento al artículo 430 del CGP por remisión expresa del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.

⁴ Ver folios 263 a 290 proceso ordinario

⁵ Ver folios 355 a 381 proceso ordinario

⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de dos (2) de abril de 2014, Consejero Ponente Gerardo Arenas Monsalve, expediente No. 11001032500020140030200 “Por regla general, en los procesos ejecutivos que se promueven con fundamento en las providencias judiciales, el título ejecutivo es complejo y está conformado por la providencia y el acto que expide la administración para cumplirla. En ese caso, el proceso ejecutivo se inicia porque la sentencia se acató de manera imperfecta. Por excepción, el título ejecutivo es simple y se integra únicamente por la sentencia, cuando, por ejemplo, la administración no ha proferido el acto para acatar la decisión del juez. En el último caso, la acción ejecutiva se promueve porque la sentencia del juez no fue cumplida. (...)”.

⁷ Art. 192 CPACA (...) “Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada.”.



Radicación : 76001-23-33-000-2019-00979-00
Medio de control : EJECUTIVO
Ejecutante : LUIS FERNANDO RONCANCIO CARDONA Y OTROS
Ejecutado : NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

5

Para dar cumplimiento a los artículos 2⁸, 3⁹ y 4¹⁰ del Decreto 806 de 2020, la parte ejecutante deberá remitir copia de la demanda, de sus anexos y del mandamiento de pago a: **i) la entidad demandada NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, ii) al Ministerio Público; y iii) a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al correo electrónico de dichas entidades.**

En consecuencia,

RESUELVE

PRIMERO: AVOCAR CONOCIMIENTO del proceso ejecutivo promovido por los señores LUIS FERNANDO RONCANCIO CARDONA, DORA DE JESUS CARDONA y MARIA ISABEL RONCANCIO CARDONA contra la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

⁸ Artículo 2. Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Se deberán utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la gestión y trámite de los procesos judiciales y asuntos en curso, con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la justicia, como también proteger a los servidores judiciales, como a los usuarios de este servicio público.

Se utilizarán los medios tecnológicos para todas las actuaciones, audiencias y diligencias y se permitirá a los sujetos procesales actuar en los procesos o trámites a través de los medios digitales disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades presenciales o similares, que no sean estrictamente necesarias.

Por tanto, las actuaciones no requerirán de firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales o autenticaciones adicionales, ni incorporarse o presentarse en medios físicos.

Las autoridades judiciales darán a conocer en su página web los canales oficiales de comunicación e información mediante los cuales prestarán su servicio, así como los mecanismos tecnológicos que emplearán.

En aplicación de los convenios y tratados internacionales se prestará especial atención a las poblaciones rurales y remotas, así como a los grupos étnicos y personas con discapacidad que enfrentan barreras para el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, para asegurar que se apliquen criterios de accesibilidad y se establezca si se requiere algún ajuste razonable que garantice el derecho a la administración de justicia en igualdad de condiciones con las demás personas.

Parágrafo 1. Se adoptarán todas las medidas para garantizar el debido proceso, la publicidad y el derecho de contradicción en la aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones.

Para el efecto, las autoridades judiciales procurarán la efectiva comunicación virtual con los usuarios de la administración de justicia y adoptarán las medidas pertinentes para que puedan conocer las decisiones y ejercer sus derechos.

Parágrafo 2. Los municipios, personerías y otras entidades públicas, en la medida de sus posibilidades, facilitarán que los sujetos procesales puedan acceder en sus sedes a las actuaciones virtuales.

⁹ Artículo 3. Deberes de los sujetos procesales en relación con las tecnologías de la información y las comunicaciones. Es deber de los sujetos procesales realizar sus actuaciones y asistir a las audiencias y diligencias a través de medios tecnológicos. Para el efecto deberán suministrar a la autoridad judicial competente, y a todos los demás sujetos procesales, los canales digitales elegidos para los fines del proceso o trámite y enviar a través de estos un ejemplar de todos los memoriales o actuaciones que realicen, simultáneamente con copia incorporada al mensaje enviado a la autoridad judicial.

Identificados los canales digitales elegidos, desde allí se originarán todas las actuaciones y desde estos se surtirán todas las notificaciones, mientras no se informe un nuevo canal. Es deber de los sujetos procesales, en desarrollo de lo previsto en el artículo 78 numeral 5 del Código General del Proceso, comunicar cualquier cambio de dirección o medio electrónico, so pena de que las notificaciones se sigan surtiendo válidamente en la anterior.

Todos los sujetos procesales cumplirán los deberes constitucionales y legales para colaborar solidariamente con la buena marcha del servicio público de administración de justicia. La autoridad judicial competente adoptará las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento.

¹⁰ Artículo 4. Expedientes. Cuando no se tenga acceso al expediente físico en la sede judicial, tanto la autoridad judicial como los demás sujetos procesales colaborarán proporcionando por cualquier medio las piezas procesales que se encuentren en su poder y se requieran para desarrollar la actuación subsiguiente. La autoridad judicial, directamente o a través del secretario o el funcionario que haga sus veces, coordinará el cumplimiento de lo aquí previsto.

Las autoridades judiciales que cuenten con herramientas tecnológicas que dispongan y desarrollen las funcionalidades de expedientes digitales de forma híbrida podrán utilizarlas para el cumplimiento de actividades procesales.

SEGUNDO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO a favor de LUIS FERNANDO RONCANCIO CARDONA quien obra a través de apoderado judicial, por los siguientes valores:

- Por concepto de perjuicios morales la suma de SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS (\$ 64.435.000).
- Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (\$ 11.805.867).
- A favor de la señora DORA DE JESÚS CARDONA, por concepto de perjuicios morales la suma de SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS (\$ 64.435.000).
- Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$ 2.906.575).
- A favor de la señora MARIA ISABEL RONCANCIO CARDONA, por concepto de perjuicios morales la suma de TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS (\$ 32.217.500).
- Por los intereses comerciales y moratorios sobre las sumas a que se refieren los ítems anteriores, conforme al numeral quinto de la providencia de primera instancia ejecutada.

TERCERO: La condena en costas y agencias en derecho se efectuará conforme a lo probado en el proceso.

CUARTO: Se **ADVIERTE** que las sumas ordenadas en los numerales anteriores serán nuevamente objeto de revisión dentro de la oportunidad procesal pertinente.

QUINTO: ORDENAR a la parte ejecutada, que de conformidad con el artículo 431 del Código General del Proceso, **cancele las anteriores sumas a la parte demandante dentro de los cinco (5) días siguientes al presente proveído, o en su defecto, proponga excepciones en el término de diez (10) días siguientes a la presente decisión.**

SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente proveído a la entidad ejecutada **NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, a través de su representante legal o a quien se haya delegado la facultad de recibir



Radicación : 76001-23-33-000-2019-00979-00
Medio de control : EJECUTIVO
Ejecutante : LUIS FERNANDO RONCANCIO CARDONA Y OTROS
Ejecutado : NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

7

notificaciones, al Ministerio Público¹¹ y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y por estado a la parte ejecutante, corriéndole traslado conforme los términos del artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 612 del Código General del Proceso en concordancia con los artículos 431 y 442 del C.G.P, la notificación se efectuará remitiendo mensaje de datos al correo electrónico¹² para notificaciones judiciales de las entidades y en la Secretaría de la Corporación, se dejará copia de la demanda y sus anexos a disposición de la misma.

Tercero: ORDENAR a la parte ejecutante que REMITA copia de la demanda, de sus anexos y del mandamiento de pago, a través del correo electrónico autorizado, a las siguientes partes del proceso: **i)** la entidad demandada **NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, **ii)** al Ministerio Público; y **iii)** a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ZORANNY CASTILLO OTALORA
Magistrada

¹¹ Artículo 171 No. 2 del CPACA

¹² Artículo 197 Inc. 2 CPACA concordado art. 612 C.G.P.